CONSTANCIA SECRETARAL: Se deja en el sentido de que dentro del presente proceso Colpensiones presentó alegatos de conclusión por escrito dentro del término establecido en el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, adoptado como legislación permanente por medio de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022.

Sin necesidad de firma Artículo 2, inciso 2 Decreto Presidencial 806 de 2020 y artículo 28 del Acuerdo PCSJA20-11567

DIEGO ANDRÉS MORALES GÓMEZ
Secretario

Radicación No.: 66001-31-05-003-2019-00433-01
Proceso: Ordinario Laboral
Demandante: Marino González González
Curadora: Luz Dary González López
Demandado: Colpensiones
Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PRIMERA DE DECISION LABORAL

Magistrada Ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

Pereira, Risaralda, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Acta No. 207 del 13 de diciembre de 2022

Teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, adoptado como legislación permanente por medio de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, estableció que en la especialidad laboral se proferirán por escrito las providencias de segunda instancia en las que se surta el grado jurisdiccional de consulta o se resuelva el recurso de apelación de autos o sentencias, la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por las Magistradas ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, como Ponente, y OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA, y el Magistrado GERMÁN DARÍO GOEZ VINASCO, procede a proferir la siguiente sentencia escrita dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **Luz Dary González López**, como curadora del señor **Marino González González (q.e.p.d.)**, en contra de la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**.

PUNTO A TRATAR

Por medio de esta providencia procede la Sala a revolver el recurso de apelación interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en contra de la sentencia proferida el 8 de marzo de 2022 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. Asimismo, se revisará íntegramente la decisión de primer grado en virtud del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 69 del C.P.T. y la s.s., al haber sido adversa a los intereses de la aludida entidad.

Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

1. La demanda y la contestación de la demanda

El citado demandante, por intermedio de curadora, solicita que se declare a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, responsable de pagar el retroactivo de la pensión de invalidez que le fue reconocida el 1º de diciembre de 2017, junto con su respectiva tasa prestacional.

Como consecuencia, pretende que se condene al fondo público de pensiones a reconocer y pagar dicho retroactivo pensional a partir del 1º de abril de 2012, fecha en la cual se ejecutó el último aporte válido a pensión, hasta el 1º de diciembre de 2017, fecha desde la cual fue reconocido el beneplácito pensional. De ser negada la pretensión principal, pide que el retroactivo pensional se reconozca desde el 4 de marzo de 2016, fecha en la que la Corte Constitucional profirió el fallo de tutela que ordenó reconocer la pensión de invalidez a su favor.

Asimismo, procura que se ordene a Colpensiones que reconozca y pague los intereses de mora a la tasa máxima vigente al momento en que se efectúe el pago la obligación, y las respectivas costas procesales.

Para fundar tales pretensiones manifiesta que padece graves problemas de salud, consistentes en "*Demencia y trastorno afectivo bipolar*", por los cuales el 12 de diciembre de 2015 fue calificado por el Departamento de Medicina Laboral de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, quien encontró un porcentaje de Pérdida de Capacidad Laboral del 68,5%, estructurado el 18 de febrero de 2009 y de origen común.

Aduce que, en virtud de lo anterior, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, misma que fue negada a través de Resolución GNR 134016 del 8 de mayo de 2015.

Refiere que posteriormente radicó acción de tutela con el fin de que se ordenara a la entidad demanda el reconocimiento y pago del beneficio pensional, sin que ello fuere posible en primera y segunda instancia, no obstante, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-111 de 2016 revocó la sentencia proferida en segunda instancia, que a su vez confirmó la de primera instancia y, en su lugar, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados, ordenando a Colpensiones reconocer y pagar a su favor la pensión de invalidez deprecada.

Afirma que Colpensiones, mediante la Resolución GNR 134051 del 5 de mayo de 2016 le reconoció pensión de invalidez, empero, a través de Resolución GNR 264541 del 23 de noviembre de 2017 ordenó su ingreso a la nómina de diciembre de 2017, pagadera en enero de 2018, sin cancelar el retroactivo pensional.

Señala que el 16 de julio de 2019 elevó nueva solicitud ante Colpensiones, exigiendo el reconocimiento del retroactivo pensional causado entre el 1º de abril de 2012 y el 1º de diciembre de 2017, siendo denegado su pedimento mediante la Resolución SUB 233458 de la misma anualidad.

Finalmente, aclara que no presenta aportes válidos al sistema de pensiones desde el mes de marzo del año 2012, y que no se consignó a su favor emolumento alguno por concepto de incapacidad médica por parte de la Nueva EPS.

Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones impetradas por el demandante alegando que no estaba obligada a reconocer el retroactivo pretendido ni los intereses de mora solicitados, en razón a que el último periodo de pago, previo al reconocimiento de la pensión de invalidez, corresponde al de noviembre de 2017, es decir, el accionante siguió cotizando al sistema con posterioridad al mes de abril de 2012, por lo que aquellos aportes fueron tenidos en cuenta al momento de realizar el pago de la mesada pensional, tal y como se ve reflejado en la Resolución SUB 264541 del 23 de noviembre de 2017, en la que se ordenó ingresarlo en nómina de diciembre de 2017, pagadera en el mes de enero de 2018.

En ese orden de ideas, propuso como excepciones de mérito las que denominó "*Falta de cumplimiento de requisitos*"; "*Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido*"; "*Buena fe*" y "*Prescripción*".

2. Sentencia de primera instancia

La jueza de primer grado declaró probada la excepción de prescripción frente a las mesadas pensionales causadas entre el 1º de abril del año 2012 y el 31 de mayo del año 2013, y determinó que el señor Marino González González tiene derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional de su pensión de invalidez causado entre el 1º de junio del año 2013 y el 30 de noviembre del año 2017, respecto del cual autorizó a Colpensiones a descontar los emolumentos correspondientes al sistema de salud.

Por último, condenó en costas a la entidad demandada a favor del demandante en cuantía equivalente al 50% de las causadas.

Fundó la A-quo tal determinación aduciendo que, de conformidad con las pruebas documentales introducidas al plenario, el demandante siguió cotizando al sistema hasta el 31 de marzo de 2012, llevando a cabo labores que le permitían generar ingresos para atender sus necesidades básicas, ello en uso de su capacidad laboral residual, siendo aquella la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, a partir de la cual se empezó a contabilizar el término para impetrar la solicitud pensional, lo cual se dio en junio del año 2016, cuando presentó la acción de tutela que devino en el reconocimiento de la prestación. En tal virtud, estimó que las mesadas causadas con antelación al 1º de junio de 2013 se vieron afectadas por la prescripción.

Así las cosas, refirió que una efectuado el descuento por concepto de aportes al sistema de salud al retroactivo causado entre el 1º de junio de 2013 y el 30 de noviembre de 2017, se tenía un excedente de \$22.399.830 a favor del actor, respecto del cual corrían los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la mora en que incurrió Colpensiones en reconocer la gracia pensional y el retroactivo.

Por último, dispuso la condena del 50% de las costas procesales en contra de Colpensiones en virtud a la prosperidad parcial de las pretensiones.

3. Recurso de apelación y procedencia de la consulta

El apoderado judicial de Colpensiones atacó el fallo de instancia alegando que esa entidad ha actuado de manera diligente frente a las reclamaciones administrativas que llevó a cabo el señor González, siendo del caso considerar que fue por la tutela revisada por la Corte Constitucional, negada en primera y segunda instancia, que esa entidad reconoció el derecho, resultando improcedente igualmente la condena en costas procesales.

Por otra parte, tal como se advirtiera en precedencia, la decisión de primer grado se revisará en sede jurisdiccional de consulta al haber sido adversa a los intereses de Colpensiones.

4. Alegatos de conclusión

Analizado los escritos de alegatos presentados por Colpensiones, mismos que obran en el expediente digital y a los cual nos remitimos por economía procesal en virtud del artículo 280 del C.G.P., la Sala encuentra que los argumentos fácticos y jurídicos expresados concuerdan con los puntos objeto de discusión en esta instancia y se relacionan con el problema jurídico que se expresará más adelante. Por otra parte, el Ministerio Público no rindió concepto en este asunto.

5. Problema jurídico por resolver

De acuerdo a los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, los fundamentos de la apelación y los alegatos de conclusión, le corresponde a la Sala determinar si el señor Marino González tiene derecho al retroactivo reconocido en primera instancia y, en caso afirmativo, si hay lugar a reconocer intereses moratorios, y a condenar a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

6. Consideraciones

6.1. Supuestos fácticos por fuera de debate

Son hechos que se encuentran por fuera de discusión los siguientes:

- Que mediante dictamen emitido por el grupo médico laboral de Colpensiones el 12 de diciembre de 2015, se estableció una pérdida de capacidad laboral del señor Marino González del 68,5%, de origen común y estructurada el 18 de febrero de 2009.
- Que la Corte Constitucional a través de la sentencia T-111 de 2016 ordenó a Colpensiones que reconociera y pagara al demandante la pensión de invalidez, con ocasión de la enfermedad degenerativa que padecía, tomando como su última cotización aquella reportada en marzo de 2012.
- Que mediante la Resolución GNR 134051 de 2016 Colpensiones acató el fallo antedicho, reconociendo la prestación desde mayo de 2016, pero supeditando su inclusión en nómina hasta tanto se designara curador al señor González.
- Que mediante sentencia del 15 de agosto de 2017 el Juzgado 4º de familia de Manizales declaró la inhabilidad negocial indefinida por discapacidad mental relativa del señor Marino González y designó a su hermana, Luz Dary González, como su curadora.
- Que a través de la Resolución SUB 264541 de 2016 Colpensiones dispuso el ingreso del promotor de la litis en la nómina de diciembre de 2017.
- Que el señor Marino Gonzales falleció el 16 de junio de 2021, según da cuenta el registro civil de defunción visible en el expediente administrativo allegado por Colpensiones (archivo GEN-RCD-AP-2021_97439).

6.2. Caso concreto

A efectos de resolver el primero de los problemas jurídicos planteados, bastará con indicar que la decisión emanada por la Corte Constitucional en la sentencia T-111

de 2016 zanjó cualquier dubitación generada alrededor del derecho que le asistía al señor Marino González, y del momento a partir del cual se causó el mismo.

En efecto, fue explícita la Alta Corporación al exponer que en el presente caso las cotizaciones que aparecían registradas hasta marzo de 2012 permitían concluir que fue en esa fecha que el actor agotó su capacidad laboral residual, debiendo entenderse que la estructuración de su invalidez se gestó en ese momento, cuando además alcanzaba un 68% de pérdida de capacidad laboral. En tal sentido, al comparecer los requisitos para causar la gracia pensional, era evidente que el reconocimiento debía acompasarse con tal suceso, conforme lo dispone el artículo 40 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, además de que en la Resolución SUB 264541 de 2017 se acató tardíamente la orden emanada de la Corte Constitucional, pues se ordenó la inclusión en nómina desde diciembre de 2017, en ella no se dispuso el reconocimiento retroactivo desde la causación sino desde una fecha que desatendía todo criterio legal y jurisprudencial, pasando por alto incluso que la misma entidad había dispuesto en la resolución GNR 134051 de 2016 que el reconocimiento sería desde mayo de esa anualidad, y cimentando el pago extemporáneo en unas supuestas semanas posteriores a marzo de 2012, que jamás fueron reconocidas por esa entidad, ni en las historias laborales que militan en el infolio, ni en las distintas resoluciones emanadas.

En virtud de lo anterior, se estima acertada la disertación de la jueza de instancia frente al momento de la causación, que daría lugar al reconocimiento del retroactivo a partir de esa fecha, de no ser porque se declararon prescritas las mesadas causadas con antelación al 1º de junio de 2013 en razón a que la acción de tutela se impetró por el demandante en junio de 2016; decisión que no fue atacada por el apoderado de la parte actora y que no hay lugar a modificar por conocerse el asunto por apelación de Colpensiones y en sede jurisdiccional de consulta a favor de dicha entidad.

En cuanto al retroactivo que dispuso cancelar la A-quo, en el archivo "16Liquidación" se aprecia que se tuvieron en cuenta la totalidad de mesadas causadas entre junio de 2013 y noviembre de 2017, lo que arrojó un valor de \$25.454.352, que al descontársele el 12% por concepto de aportes a salud (\$3.054.522), deviene en un monto total de \$22.399.830.

Con relación a los intereses moratorios habrá de decirse que si bien en la sentencia de primer grado se aludió a ellos en la parte considerativa, se pasó por alto plasmar tal determinación en la resolutive, por lo que en principio habría lugar a complementar la decisión; no obstante, como quiera que la negativa de la administradora de pensiones atendió lo dispuesto en la calificación de pérdida de capacidad laboral y las disposiciones legales -al carecer de las 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración dictaminada-, y que la orden emanada por la Corte Constitucional atendió el precedente de la misma corporación en relación con las enfermedades degenerativas, la Sala se abstendrá de efectuar la complementación. No obstante, en su lugar se dispondrá la indexación del retroactivo, sin que ello implique la trasgresión de la *non reformatio in pejus*, pues atiende criterios de justicia y equidad frente a la depreciación de la moneda.

La condena en costas de primera instancia se mantendrá incólume por provenir de la disposición adjetiva que impone dicha carga a la parte vencida en un juicio.

Finalmente se dirá que al haber fallecido el señor Marino González Gonzáles en el curso del proceso, el retroactivo se debe reconocer a favor de su masa sucesoral, situación que pasó por alto la jueza de instancia y que dará lugar a adicionar el ordinal primero del fallo objeto de alzada.

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante, las cuales se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Primera de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR para el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 8 de marzo de 2022, en el sentido de que Colpensiones deberá pagar el retroactivo **debidamente indexado a favor de la masa sucesoral del señor Marino González González**.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante en 100%, las cuales se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Magistrada Ponente,

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN
Con firma digital al final del documento

La Magistrada y el Magistrado,

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA
En uso de permiso

GERMAN DARIO GÓEZ VINASCO
Con firma digital al final del documento

Firmado Por:

Ana Lucia Caicedo Calderon
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 1 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

German Dario Goez Vinasco
Magistrado
Sala 003 Laboral
Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9151e4869b46185f9444256c31f8de56d556e7dbffdca73310f8c9d5399baf9b**

Documento generado en 14/12/2022 07:48:04 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>